Expediente No.: 04/2014-M

Quejosa: *****

Resolución: Recomendación No. 50/2014

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veinticuatro de septiembre de dos mil catorce.

Visto el expediente 04/2014-M, motivado por la C. *****; en representación de su menor hija ***** en contra de actos presuntamente violatorios de derechos humanos, imputados a la Profra. *****; Directora de la Escuela Primaria *****; con residencia en Matamoros, Tamaulipas, los que analizados se calificaron como Violación del Derecho a la Educación y Violación a los Derechos del Niño, este Organismo procede a emitir resolución tomando en consideración los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Esta Comisión, por conducto de nuestra Delegación Regional en Matamoros, Tamaulipas, recibió el escrito de queja de la C. *****; quien expuso:

*“... Que por medio de la presente es mi deseo interponer queja en contra de la Profra. *****; Directora de la Escuela Primaria ***** toda vez que tengo a mi menor hija de nombre ***** cursando el 5° “B” en dicha institución, el caso es que en el mes de agosto se pidió un pago de \$70.00 pesos para los exámenes anuales, ya llegada la fecha del examen a mi hija no se lo entregaron quedando sin presentar el mismo, manifestándome la directora que no me habían registrado el pago obligándome a pagar nuevamente el costo del examen pagando al siguiente día que era el último día del examen presentando mi hija su respectivo examen obteniendo el 3° lugar del bimestre pero por error de la directora mi hija se ha visto afectada ya que siempre ha sacado buenas calificaciones. Motivo por el cual interpongo la presente queja ya que mi hija el primer día de la aplicación de examen fue la única a la que la directora dejó si presentar, haciendo que mi hija se sintiera mal al ver que la iban a reprobar lo que considero injusto ya que por error de la directora no se pudo aplicar ese mismo día el examen a mi hija, siendo mas fácil haberle sacado una copia y después la pagaba. Quiero aclarar que ella no da algún recibo de pago o anotó en algún libro ya que ella se queda con el dinero, diciendo que eso es asunto administrativo.” [sic]*

2. Una vez analizado el contenido de la queja, se calificó como presuntamente violatoria de derechos humanos; se admitió a trámite, radicándose con el número 04/2014-M, y se acordó solicitar a la autoridad señalada como responsable un informe justificado relacionado con los hechos denunciados, así como la exhibición de toda la documentación que se hubiera integrado sobre el caso.

3. Mediante escrito de 29 de enero de 2014, la C. Profra. ***** , Directora de la Escuela Primaria ***** en Matamoros, remitió informe en los siguientes términos:

*“...PRIMERO. Es cierto, como menciona la señora ***** , tiene inscrita en la Escuela Primaria ***** a su hija ***** en 5° B.- SEGUNDO. Es cierto que se solicitó al inicio del ciclo escolar cubrir el costo de todos los exámenes del año lectivo, el cual fue de \$70.00 (setenta pesos 00/100), sabiendo que su reproducción genera un pago a un tercero. Cabe aclarar que son 8 los exámenes que se realizan durante todo el ciclo escolar. Así mismo le comunico que con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 65 Fracción III de la Ley General de Educación, en el cual menciona que los Padres de Familia “Colaborarán con las autoridades escolares para la superación de los educandos y el mejoramiento de los establecimientos educativos”.- TERCERO. Existe dentro de la institución un trabajo colaborativo, donde en un primer momento; al inicio de las inscripciones, a la ***** se le delegó la tarea de recoger aportaciones para cubrir el costo de los exámenes, debido a que ella no tenía grupo por inscribir al estar comisionada al aula de medios, sin embargo, una vez terminada la inscripción por cuestiones de organización fue conferida a la maestra ***** la difícil tarea de recoger las aportaciones de exámenes. Siendo esta última quien se dio a la tarea de solicitar al prestador de servicios de impresión la reproducción de los exámenes, contabilizando a aquellos que cubrieron el total de la cantidad y también a aquellos que a través de un abono cubrían este segundo examen, porque cabe hacer mención que se dio la oportunidad de cubrir la cantidad en abonos. CUARTO. No es cierto, que obligue a la señora ***** a pagar el examen por segunda ocasión. Ella acudió a la Dirección Escolar, mencionando que ya había liquidado el pago de los exámenes, y yo al revisar una copia del registro de las aportaciones de los exámenes que me había proporcionado, no encontré registro alguno, le sugerí que fuera a verificar con la maestra ***** encargada del manejo de los exámenes, por si ella tenía otra lista actualizada de dicho pago, pero no encontrando ningún registro de pago de la señora ***** , regresó a la Dirección Escolar mencionando que le había pagado a otra maestra, entonces mande llamar a la maestra ***** , que había estado apoyando en la tarea de recoger las aportaciones de los exámenes durante las inscripciones, en el mes de agosto del año 2013, no encontrándose nota alguna en los registros de la maestra ***** . Una vez verificada la situación, que no se había realizado el pago, la señora ***** , en ese momento con una actitud de conformidad realizó el pago.- QUINTO. Le*

informo que por indicaciones de la Supervisión Escolar la aplicación de exámenes bimestrales son de dos días.- SEXTO. La Alumna ***** , es nuevo ingreso en la Escuela Primaria ***** , y es cierto que elaboró el examen el segundo día de aplicación del primer bimestre, así como otros alumnos de la escuela por la misma situación, por ausentismo, por motivos de salud u otros.- SEPTIMO.- Es cierto que la alumna ***** , obtuvo el tercer lugar en el primer bimestre, pero al respecto de este punto le informo que la evaluación bimestral que se realiza en la escuela tiene fundamento en el modelo del acuerdo 696 por el cual se establecen normas generales para la evaluación, acreditación, promoción y certificación en la educación básica, lo cual implica “que la información sobre el desempeño de los alumnos se obtenga de distintas fuentes, no solo de las pruebas ”.- OCTAVO. Es cierto que no se fotocopia el examen del primer bimestre, ya que la copiadora de la escuela reproduce el fotocopiado con manchas o de manera muy ilegible, por tener dañado el rodillo, según menciona el técnico que la revisa.- NOVENO. Es cierto, que no se extiende un recibo por pago, sin embargo se lleva un registro de las aportaciones para cubrir la reproducción de los exámenes. Este registro es manejado por la maestra ***** , la cual puede constatar que la aportación que realizó el 29 de Octubre de 2013 la señora ***** no quedó en mis manos, como desafortunadamente la señora ***** lo asevera la quejosa.- Me parece oportuno expresar, que durante mis 24 años de servicio mi mayor sentir ha sido aportar en beneficio de los niños para llevarlos a ser individuos responsables, nunca cuartar los derechos de los educandos, sin embargo, hay situaciones que son imposibles sobre llevar sin las aportaciones de los padres, al presentarse en más de un caso las cantidades monetarias aumentan y me es imposible cubrirle a los prestadores de servicio de honorarios por rendir sus servicios. Quedo a sus órdenes para cualquier otra aclaración con el único afán de dar una respetuosa respuesta a esta queja y así llegar a raer malos entendidos con la madre de familia de nuestra institución; señora ***** . Finalmente, adjunto al presente elementos que considero pertinentes para aclarar dicha situación...”[sic]

3.1. Mediante escrito de 29 de enero de 2014, la C. Profra. ***** , rindió su informe:

“...PRIMERO. Es cierto que a mí en un primer momento; al inicio de las inscripciones durante el mes de agosto, se me requirió fungir como encargada de recoger las aportaciones para cubrir el costo de reproducción de los exámenes.- SEGUNDO. Es cierto que la directora Profra. ***** me solicito que realizáramos la aclaración sobre la situación que mencionaba la señora ***** , dando por concluido frente a ella que no me había dado la aportación para la reproducción de los exámenes...”[sic]

3.2. Por escrito de 29 de enero de 2014, la C. Profra. ***** , informó lo siguiente:

*“...PRIMERO. Es cierto que a mí en un segundo momento, se me confirió la tarea de ser la encargada de lo correspondiente a los exámenes; desde recoger las cooperaciones pendientes para la reproducción de los exámenes hasta el contactarme con el prestador de servicios de impresión para que los exámenes estuvieran en tiempo y forma en las fechas programadas de aplicación. Cabe aclarar que los exámenes siempre se programan para dos días por los imprevistos que resultan durante el primer día, y que algunas veces no están a nuestro alcance solucionar al momento.- SEGUNDO. Es cierto que la señora ***** se acercó a mí para corroborar si me había entregado el costo de los exámenes, quedando aclarado que no me había entregado la aportación para la reproducir de los exámenes, después de haber revisado el registro de aportaciones.- TERCERO. Actualmente la aportación que la señora ***** , realizó el 29 de octubre de 2013 se encuentra registrada para cubrir el costo de los posteriores exámenes que se realizan en el ciclo escolar, aclarando que la directora Profra. ***** no se quedo con la aportación que ella realizó, sino que me fue entregada en tiempo y forma para realizar posteriormente el pago al prestador de servicios de impresión.” [sic]*

3.3. Mediante escrito de 29 de enero de 2014, la C. Profra. ***** , informó:

*“...PRIMERO. Se programó para dos días la aplicación del examen del primer bimestre, presentando la alumna ***** en el segundo día de aplicación; 30 de octubre. Sin embargo, el motivo por el cual la alumna no lo presento el primer día no fue por negativa de la directora Profra. ***** , sino porque al no cubrirse el costo del examen el prestador de servicios no genera prorroga de pago, imprimiendo solo lo que se le paga.- SEGUNDO. Es falso que la alumna ***** presentara signos de tristeza o que se sintiera mal, porque le hice saber que no se preocupara, que al siguiente día presentaría el examen.- TERCERO. Es cierto que en el primer bimestre la alumna ***** obtuvo el tercer lugar, como también es cierto que en el segundo bimestre decayó su promedio por su inasistencia. Es preciso aclarar, que el resultado bimestral no es generado únicamente por el examen, la calificación se obtiene valorando diversos aspectos como tareas, trabajos en clase, participaciones, entre otros”. [sic]*

4. El informe rendido por la autoridad responsable fue notificado a la quejosa, a fin de que expresara lo que a su interés conviniera, por considerarse necesario, con base en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley que rige a esta Institución, se declaró la apertura de un periodo probatorio por el plazo de diez días hábiles.

5. Dentro del procedimiento se ofrecieron y desahogaron las siguientes probanzas.

5.1. Pruebas aportadas por la quejosa:

5.1.1. Acta Administrativa de 14 de enero del 2014, de la cual se advierte que se llevó a cabo una reunión en la Escuela Primaria *****, asistiendo a la misma, la Profra. *****, Jefa de Sector *****, la Profra. *****, Supervisora Escolar de la Zona *****, la Profra. *****, directora de la Escuela *****, el Profr. *****, Representante Sindical de la Delegación *****, el Lic. *****, Representante Jurídico del Departamento de Desarrollo Regional de la Educación, el señor *****, Presidente de la Asociación de Padres de Familia, la señora *****, Tesorera, la señora *****, vocal, la señora *****, vocal, la señora *****, vocal, el señor *****, vocal y la señora *****, vocal, en la cual se trataron diferentes cuestiones, una de éstas fue que se le cuestionó a la Profra. *****, respecto al gasto que se hizo de los uniformes, contestando la Profra. ***** que se había consensado con los maestros y se tomó el acuerdo de que los exámenes se pagaran por año, se hizo un consenso y se decidió usar el dinero para el pago de 100 piezas uniformes de educación física, un integrante de la Asociación de Padres de Familia le preguntó al Lic. ***** qué si era válido tomar el dinero de los exámenes a lo que respondió el Lic. ***** que no era correcto.

5.2. Pruebas obtenidas por este Organismo

5.2.1 Declaración Informativa de la C. *****, quien manifestó:

*“...que la C. Profesora *****, Directora de la Escuela Primaria ***** no recibe ningún dinero por ningún concepto ya que todo se maneja por comisiones, donde los maestros somos los responsables, por lo que en el mes de agosto del año próximo pasado la suscrita fui la encargada de recibir el dinero por concepto del pago de los exámenes por la cantidad de \$70.00 pesos moneda nacional, por lo que en esa ocasión la suscrita estaba haciendo anotaciones en una hojas sueltas, en las cuales consta que el pago no se realizó por parte de la señora, después de recibir los pagos pasé mis anotaciones a la comisión responsable de manejar el dinero de los exámenes, es mi deseo aclarar que en ningún momento la directora haya obligado a la señora ***** a pagar el dinero de los exámenes...”[sic]*

5.2.2 Declaración informativa de la C. *****, quien señaló:

*“...es mi deseo manifestar que la suscrita fui la encargada de recibir el dinero por concepto de exámenes, por lo que al suscitarse este problema con la ahora quejosa, ésta me pide que verifique que si tenía algún adeudo, por lo que al verificar el libro que por dicho concepto se maneja en esta escuela, observo que efectivamente no había pagado el examen, por lo que le pedí que si tenía alguna duda pasara con la maestra ***** quien fue la responsable de recibir el dinero a principio del ciclo escolar, ya después la señora regreso y me dijo que me iba a pagar el total de los exámenes, por lo que se hizo el registro correspondiente.” [sic]*

5.2.3. Declaración informativa de la C. ***** , quien refirió:

*“...que efectivamente tengo como alumna a la menor ***** , en el grupo 5 “B” y a la suscrita me hacen entrega de una lista de quienes han pagado los exámenes, así como la cantidad exacta de los exámenes, por lo que al ver la lista observo que el nombre de esta niña no venía en la lista, por lo que le pido que esperara a que su mamá llegara y que aclarara el problema en la dirección, por lo que en ese día no se le aplicó examen, en ese sentido deseo aclarar que la suscrita soy ajena o no soy responsable por el hecho de que la menor no se le haya aplicado el examen, ya que a mí me dan el número exacto de exámenes, así mismo deseo aclarar que en ningún momento observe que la niña se haya visto afectada emocionalmente ya que siguió trabajando normalmente y al día siguiente sin ningún problema y después de haber aclarado lo de la deuda se le aplicó el examen mismo que respondió sin ningún contratiempo ya que la alumna es muy inteligente y en cuanto a su tercer lugar, este no fue por el contratiempo en la aplicación de su examen, sino porque hay dos alumnos con mejor promedio que ella”. [sic]*

5.2.4. Declaración Informativa de la menor ***** , quien refirió:

*“que estudio en la escuela primaria ***** en el 5° año grupo “B” que el día en que nos iban aplicar el examen del primer bimestre la maestra ***** nombró a todos los que tenían examen y a mí no y entonces le pregunté maestra por qué a mí no me nombro y me dijo que porque mi mamá no había pagado lo que le dije que mi mamá si había pagado entonces se fue a la dirección a ver si se había pagado y cuando regreso me dijo que no se había pagado el examen y yo le volví a decir que si y ya mejor así me quedé esto me lo dijo en el salón estando mis compañeros presentes, ya al otro día presenté mi examen, pero el primer día sí me sentí triste porque no me dieron oportunidad de presentar el examen”. [sic]*

5.2.5 Declaración informativa de la C. ***** , quien manifestó:

*“...que una vez que se me diera vista del informe rendido por la C. Profra. *****, es mi deseo manifestar que no estoy de acuerdo con lo informado porque en lo referente a los \$70.00 pesos yo entregue un acta a secude donde ella aceptaba que había tomado ese dinero para pagar los uniformes entonces yo no entiendo porque la limitancia del examen de mi hija si el dinero no lo ocupaba para los exámenes en ese momento, además aunque ella diga que se le pueden ir situaciones de las manos, mi hija me contó que la maestra le dijo espérame deja ver en la dirección pero después que regreso no se lo dio pero por órdenes de la directora que no se le hiciera entrega del examen. Quiero agregar que no tengo nada en contra de la maestra de mi hija porque ella es una excelente maestra ya que mi hija ha sacado buenas calificaciones. Siendo solo mi disgusto con la directora por haberle negado el examen ya que ella no tiene el derecho de perjudicarla ya que por \$70.00 pesos no valen nada para que a mi hija me la haya perjudicando en sus calificaciones, y que no diga que ella no tuvo nada que ver porque las maestras de grupos ni ningún personal de la institución se mandan solos ya que siempre están regidas por la directora que es la que toma las decisiones ya que las maestras se lo hacen saber y ella al final decide que hacer como en este caso como ya se mencionó la maestra de grupo le fue a preguntar a la directora y por órdenes de ella no se aplicó dicho examen a mi hija, lo que considero irregular que ahora la directora se quiera lavar las manos culpando a la maestra del manejo del dinero”. [sic]*

6. Una vez concluido el periodo probatorio, el expediente quedó en estado de resolución, de su análisis se desprenden las siguientes:

CONCLUSIONES

Primera. Este Organismo es competente para conocer la queja planteada por la C. *****, por tratarse de actos u omisiones presuntamente violatorios de derechos humanos, imputados a una servidora pública que presta sus servicios dentro del territorio del Estado, al tenor de lo dispuesto por los artículos 102 apartado “B” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3, 8, fracciones I, II, III y IV de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas.

Segunda. No existe acreditada alguna causa de improcedencia.

Tercera. El motivo de queja materia del presente expediente, reducida a una mínima expresión consiste en lo siguiente;

La C. ***** señaló que la Profesora *****; Directora de la Escuela Primaria ***** en Matamoros, solicitó la cantidad de \$70.00 por concepto de pago de exámenes anuales, misma que realizó; sin embargo, cuando su hija *****; iba a presentar su examen del primer bimestre del 5º grado, la directora no permitió que su hija los presentara hasta que cubriera dicha cantidad, lo que provocó que su hija se sintiera mal; por tal motivo, acudió al plantel y se entrevistó con la Directora, Profesora ***** para hacer la aclaración de tal situación, manifestándole ésta que el pago no lo había registrado, obligándola a cubrir nuevamente el mismo, con el fin de que al día siguiente su hija presentara su examen, obteniendo el 3º lugar; lo que consideró injusto debido a que por un error de la directora de no haber registrado el pago, se perjudicó a su hija quien se ha destacado con obtener buenas calificaciones.

Cuarta. En lo atinente al motivo de queja, esta Comisión estima que es patente la violación a los derechos humanos de la hija de la quejosa.

Al respecto, la C. Profra. *****; Directora de la Escuela Primaria ***** en Matamoros, aceptó tácitamente tal situación y expuso que no obligó a la C. ***** a pagar el examen por segunda ocasión; sino que ésta aceptó de conformidad.

Así mismo, las CC. Profesoras ***** y *****; señalaron que se hizo la aclaración sobre el pago con la señora *****; concluyendo que no se había dado dicha aportación, por tal razón, ésta realizó el pago correspondiente.

Cabe señalar, que con independencia de que se haya realizado o no el pago correspondiente al fotocopiado de exámenes, se encuentra debidamente acreditado que a la menor ***** no se le permitió presentar los mismos hasta que quedó debidamente registrado que la aquí quejosa cubrió el monto requerido para tal efecto, como lo afirmó la C. ***** en su escrito de queja, situación que fue corroborada por la menor ***** y la C. Profesora *****;

causando con ello una afectación, pues la menor no estuvo en posibilidades de presentar su examen el día indicado como sus demás compañeros, sino hasta el día siguiente, lo que sin lugar a dudas causó un impacto emocional en la alumna.

Es menester destacar que la C. Profesora ***** en su informe, invocó el artículo 65 fracción III de la Ley General de Educación con la intención de justificar el requerimiento de aportaciones; sin embargo, en dicho precepto, ni en ningún otro, se establece que la falta de aportación de los padres de familia, otorga facultades para limitar el derecho de los alumnos a tener acceso a todos y cada uno de los procesos enseñanza – aprendizaje; por el contrario, se establecen aportaciones “voluntarias”, mismas que es sabido resultan necesarias para proveer a los alumnos de mejores espacios y materiales, sin que deba trascender, ni ser condicionantes para garantizar a los menores educandos el acceso al proceso antes citado, de hacerlo así, se genera una afectación a la esfera de los derechos de los menores, además de promover en los educandos una cultura de ilegalidad, circunstancias que van en contra de los principios que regulan la educación en nuestra entidad federativa.

Ante esa perspectiva y los hechos probados, esta Comisión considera que la Profesora ***** , incumplió con su obligación de privilegiar el pleno derecho de la menor pasiva a ser protegida en su integridad, pues causó un impacto emocional en la alumna ***** , desatendiendo su deber de protección hacia los menores y de procurar un desarrollo armónico de su personalidad en el seno de la escuela y la sociedad, el derecho en cita está reconocido en los artículos 4, párrafos 8º y 9º de nuestra constitución federal; 16 y 19.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 24.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos¹; 42

¹ **Artículo 4º.** [...]

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. [...]

Artículo 16

de la Ley General de Educación; 1º.; 2º.; 3º.; 4º.; 7º.; 11, apartado B, primer párrafo; 21, apartado A, y 32, inciso f) de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes², los que establecen la obligación de toda persona de garantizar, respetar,

1. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación.

2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques.

Artículo 19

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

Artículo 24

1. Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado.

²**Artículo 11.** Son obligaciones de madres, padres y de todas las personas que tengan a su cuidado niñas, niños y adolescentes:

(...)

B. Protegerlos contra toda forma de maltrato, prejuicio, daño, agresión, abuso, trata y explotación. Lo anterior implica que la facultad que tienen quienes ejercen la patria potestad o la custodia de niñas, niños y adolescentes no podrán al ejercerla atentar contra su integridad física o mental ni actuar en menoscabo de su desarrollo.

(...)

Artículo 21. Niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a ser protegidos contra actos u omisiones que puedan afectar su salud física o mental, su normal desarrollo o su derecho a la educación en los términos establecidos en el artículo 3o. constitucional. Las normas establecerán las formas de prever y evitar estas conductas. Enunciativamente, se les protegerá cuando se vean afectados por:

A. El descuido, la negligencia, el abandono, el abuso emocional, físico y sexual.

Artículo 32. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación que respete su dignidad y les prepare para la vida en un espíritu de comprensión, paz y tolerancia en los términos del artículo 3º. de la Constitución. Las leyes promoverán las medidas necesarias para que:

(...)

F. Se impida en las instituciones educativas la imposición de medidas de disciplina que no estén previamente establecidas, sean contrarias a su dignidad, atenten contra su vida, o su integridad física o mental.

[...]

proteger y tener el cuidado necesario para preservar la integridad física y psicológica sobre la base de la dignidad de los menores, que tienen por objeto garantizar la tutela de sus derechos fundamentales, contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de establecer la obligación para las personas que tengan a su cuidado a menores de edad procurarles una vida digna, con el pleno y armónico desarrollo de su personalidad en el seno de la escuela y la sociedad, así como a protegerlos contra toda forma de maltrato, daño, perjuicio, agresión y abuso, que afecten su integridad física y mental.

Quinta. Afirmada la violación a los derechos fundamentales destacados en la conclusión que precede, es menester pronunciarse sobre las consecuencias de ello.

Acorde a nuestro sistema de protección a los derechos humanos *-integrado no solo por las disposiciones constitucionales, sino además por los tratados **formalmente validos sobre la materia**-* el Estado Mexicano tiene la obligación *-Ex-ante-* de prevenir las violaciones de derechos humanos, y *Ex-post* la de ejercer acciones de investigación, sanción, y reparación de la violación a los derechos humanos, esto es *-entre otras cosas-*, el Estado Mexicano tiene la obligación irrestricta de investigar la violación de derechos humanos, y en caso de que existiese, deberá sancionarla y repararla³.

Además, de conformidad con la Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en San José de Costa Rica, nuestro país adquirió la obligación general de respetar y garantizar los derechos reconocidos en dicho instrumento, para efectos explicativos conviene transcribir el contenido del citado artículo 1.1, que establece lo siguiente:

“Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

³Sobre el tema, cobra exacta aplicación la tesis Sustentada por la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la 10ª Época, del rubro y tenor siguientes: “DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIONES CONSTITUCIONALES DE LAS AUTORIDADES EN LA MATERIA.

En ese ejercicio de garantizar los derechos contenidos los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos, así lo estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, en la sentencia dictada en el caso Rosendo Cantú y otra vs. México⁴

De lo anterior, esta Comisión concluye que el fin primordial de un sistema de protección de derechos humanos no es solo declarar la responsabilidad del infractor, sino que el eje central lo constituye la reparación integral de quien resultó víctima de la acción u omisión violatoria de derechos humanos.

La reparación integral de la violación –*entiéndase, plena reparación o Restitutio in integrum*–, en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, es una obligación derivada del artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos⁵, de esta disposición se desprende que la existencia de una violación a los derechos humanos, obliga garantizar al lesionado el goce del derecho conculcado, la reparación de las consecuencias de la vulneración de ese derecho y el pago de una justa indemnización.

El concepto como tal, es una aspiración, su concreción ha sido casuística, y ha evolucionado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre el tema destaca la sentencia del caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú, de 8 de julio de 2004 (Fondo, Reparaciones y Costas)⁶

⁴Sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil diez, relativa a Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.

⁵ Artículo 63

Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, [la Corte](#) dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. (...)

⁶En especial su párrafo 189, en el que se sostuvo:

Todo lo anterior, es recogido en la Ley General de Víctimas, que en sus artículos 1º, cuarto párrafo; 26; y, 27, fracciones I a la V, reconocen el derecho a la reparación integral de las violaciones a derechos humanos y establece el contenido de tales reparaciones, sobre ello a la letra reza:

“Artículo 1.(...)”

La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del hecho victimizante.”

“Artículo 26. *Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición.”*

“Artículo 27. *Para los efectos de la presente Ley, la reparación integral comprenderá:*

I. La restitución busca devolver a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito o a la violación de sus derechos humanos;

II. La rehabilitación busca facilitar a la víctima hacer frente a los efectos sufridos por causa del hecho punible o de las violaciones de derechos humanos;

III. La compensación ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o de la violación de derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada

“189. La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in integrum), la cual consiste en el restablecimiento de la situación anterior a la violación. De no ser esto posible, como en el presente caso, le corresponde a este Tribunal Internacional ordenar que se adopten una serie de medidas para que, además de garantizarse el respeto de los derechos conculcados, se reparen las consecuencias que produjeron las infracciones y se efectúe el pago de una indemnización como compensación por los daños ocasionados en el caso pertinente. Es necesario añadir las medidas de carácter positivo que el Estado debe adoptar para asegurar que hechos lesivos como los del presente caso no se repitan. La obligación de reparar, que se regula en todos los aspectos (alcance, naturaleza, modalidades y determinación de los beneficiarios) por el derecho internacional, no puede ser modificada o incumplida por el Estado obligado invocando disposiciones de su derecho interno.”

caso. Ésta se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia del delito o de la violación de derechos humanos;

IV. La satisfacción busca reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas;

V. Las medidas de no repetición buscan que el hecho punible o la violación de derechos sufrida por la víctima no vuelva a ocurrir;

(...)"

A la luz de lo anterior y con fundamento en el artículo 48 de la ley de esta Comisión que obliga a señalar las medidas procedentes para la efectiva restitución a los afectados de sus derechos fundamentales; se **RECOMIENDA** al **Secretario de Educación del Estado**, que tome las siguientes medidas:

A. De **REHABILITACIÓN**, según lo dispone la fracción I del artículo 62 de la Ley General de Víctimas⁷, deberá;

Proveer lo necesario para que la menor pasiva de la violación, previa autorización de la quejosa, sea valorada por un especialista, quien determinará si requiere de asistencia psicológica, y en su caso, el tipo y duración del tratamiento, lo anterior para que con base en dicha opinión se otorgue la atención psicológica que la menor pasiva necesite;

B. De **COMPENSACIÓN**, acorde a lo preceptuado en el artículo 64, fracciones II, V; y, 65, inciso c) de la ley nacional de víctimas⁸, deberá:

⁷Artículo 62. Las medidas de rehabilitación incluyen, entre otras y según proceda, las siguientes:

I. Atención médica, psicológica y psiquiátrica especializadas;

(...)

⁸Artículo 64. La compensación se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia de la comisión de los delitos a los que se refiere el artículo 68 de este ordenamiento o de la violación de derechos humanos, incluyendo el error judicial, de conformidad con lo que establece esta Ley y su Reglamento. Estos perjuicios, sufrimientos y pérdidas incluirán, entre otros y como mínimo:

(...)

II. La reparación del daño moral sufrido por la víctima o las personas con derecho a la reparación integral, entendiéndose por éste, aquellos efectos nocivos de los hechos del caso que no tienen carácter económico o patrimonial y no pueden ser tasados en términos monetarios. El daño moral comprende tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directas e indirectas, como el menoscabo de valores muy significativos para las personas y toda perturbación que no sea susceptible de medición pecuniaria;

- a. En su caso, **reintegrar** a la quejosa, los gastos que haya erogado con motivo del tratamiento médico o terapéutico otorgado a la menor que hubiera sido consecuencia de la violación a los derechos humanos aquí destacada;
- b. Convenir con la quejosa sobre la entrega de algún apoyo institucional, como pudiera ser una beca u otro de cualquier índole;

C. De **SATISFACCIÓN**, según lo disponen las fracciones IV y V del numeral 73 de la Ley General de Víctimas⁹, deberá:

- a. **Proveer** lo que corresponda ante el Órgano de Control Interno de la Secretaría de Educación en Tamaulipas, para el inicio, trámite y resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de la Profesora *****; con la finalidad de que se les imponga la sanción que se estime procedente.

D. De **NO REPETICIÓN**, acorde al contenido de las fracciones VIII y IX del dispositivo 74 de la ley de víctimas¹⁰, deberá;

(...)

V. Los daños patrimoniales generados como consecuencia de delitos o violaciones a derechos humanos;

(...)

Artículo 65. Todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos serán compensadas, en los términos y montos que determine la resolución que emita en su caso:

(...)

c) Un organismo público de protección de los derechos humanos;

⁹Artículo 73. Las medidas de satisfacción comprenden, entre otras y según corresponda:

(...)

IV. Una disculpa pública de parte del Estado, los autores y otras personas involucradas en el hecho punible o en la violación de los derechos, que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades;

V. La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones de derechos humanos, y

¹⁰Artículo 74. Las medidas de no repetición son aquéllas que se adoptan con el fin de evitar que las víctimas vuelvan a ser objeto de violaciones a sus derechos y para contribuir a prevenir o evitar la repetición de actos de la misma naturaleza. Estas consistirán en las siguientes:

(...)

VIII. La educación, de modo prioritario y permanente, de todos los sectores de la sociedad respecto de los derechos humanos y la capacitación en esta materia de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como de las fuerzas armadas y de seguridad;

IX. La promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas, en particular los definidos en normas internacionales de derechos humanos y de protección a los derechos humanos, por los funcionarios públicos incluido el personal de las fuerzas armadas y de seguridad, los establecimientos

- a. **Se instruya** a la C. Profesora *****, Directora de la institución educativa de referencia, en el sentido que se garantice el derecho de los menores a que presenten sus exámenes en los tiempos establecidos, sin que los mismos sean sujetos a condicionamientos relacionados con el pago de cuotas.

En mérito de lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 102 Apartado B de la Constitución General de la República, 22, VII; 25, V; 41, Fracción II; 42; 48; y, 49 de la Ley que rige la organización y funcionamiento de este Organismo, así como los numerales 63, fracción V; 68; 69; y, 70 de nuestro reglamento interno, se resuelve:

Al Secretario de Educación del Estado, se emite la siguiente:

RECOMENDACION

Primero. Proveer lo necesario para que la menor pasiva de la violación, previa autorización de la quejosa, sea valorada por un especialista, quien determinará si requiere de asistencia psicológica, y en su caso, el tipo y duración del tratamiento, lo anterior para que con base en dicha opinión se otorgue la atención psicológica que la menor pasiva necesite.

Segundo. En su caso, reintegrar a la quejosa, los gastos que haya erogado con motivo del tratamiento médico o terapéutico otorgado a la menor que hubiera sido consecuencia de la violación a los derechos humanos aquí destacada.

Tercero. Convenir con la quejosa sobre la entrega de algún apoyo institucional, como pudiera ser una beca u otro de cualquier índole.

Cuarto. Proveer lo que corresponda ante el Órgano de Control Interno de la Secretaría de Educación en Tamaulipas, para el inicio, trámite y resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de la Profesora ***** en Matamoros, con la finalidad de que se les imponga la sanción que se estime procedente.

penitenciarios, los medios de información, el personal de servicios médicos, psicológicos y sociales, además del personal de empresas comerciales;

Quinto. Se instruya a la C. Profesora ******, Directora de la institución educativa de referencia, en el sentido que se garantice el derecho de los menores a que presenten sus exámenes en los tiempos establecidos, sin que los mismos sean sujetos a condicionamientos relacionados con el pago de cuotas.

En la inteligencia que de conformidad con el artículo 49 de la Ley de esta Comisión, se le solicita que en un plazo no mayor a diez días hábiles, informe sobre si acepta o no esta recomendación, y en su caso, remita dentro de los quince días siguientes las pruebas relativas a su cumplimiento.

Comuníquese a la partes, y hágase saber a la quejosa que el artículo 75 del reglamento de esta Comisión, le otorga el plazo de diez días hábiles para interponer el recurso de reconsideración.

Así, en términos del artículo 22 fracción VII de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas; lo aprobó y emitió el Ciudadano José Martín García Martínez, Presidente de esta Comisión.

Mtr. José Martín García Martínez

Presidente

Proyectó

Lic. Maura A. López López
Visitadora Adjunta

Vo. Bo.

Lic. Leticia Tavares Calderón
Tercera Visitadora General